



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 74 O R D I N A R I A

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticuatro minutos del jueves diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número setenta y tres ordinaria, celebrada el martes quince de agosto del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del jueves diecisiete de agosto de dos mil diecisiete:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

15/2017 y
acs.
16/2017,
18/2017 y
19/2017

Acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por los Partidos Políticos MORENA y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: “PRIMERO. Exclusivamente en la materia de las impugnaciones sobre el proceso legislativo y las relacionadas con la materia electoral, son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 promovida por el partido político MORENA, en relación con los artículos 25, Apartado C, numeral 1, y Apartado F, numeral 2; 29, apartado B, numeral 3, y 69, numeral 5, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de la Ciudad de México. TERCERO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 16/2017 promovida por el Partido Nueva Alianza, respecto de los artículos 5, 15, 17, 19, 42, 54 y 55, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México. CUARTO. Se reconoce la validez del artículo 29, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la porción normativa que señala: “Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Secreto.”, al tenor de la interpretación conforme contenida en la parte considerativa de esta sentencia. QUINTO. Se declara la invalidez del artículo 29, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la porción normativa que señala el número de diputados a elegirse por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, a fin de quedar como sigue: “2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y según el principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género.” SEXTO. Se declara la invalidez del artículo 29, Apartado B, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la porción normativa que señala: “En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple la ley.” SÉPTIMO. Se declara la invalidez del artículo 29, Apartado B, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de México. OCTAVO. Se declara la invalidez del artículo 27, Apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

NOVENO. Se declara la invalidez del artículo 53, Apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la porción normativa que señala: "...donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial." y, por vía de consecuencia, se declara la invalidez del párrafo quinto del artículo Vigésimo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México. **DÉCIMO.** Se declara la invalidez del artículo 29, Apartado B, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México en la porción normativa que señala: "...para un solo periodo consecutivo." **DÉCIMO PRIMERO.** Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo precisado en el apartado VIII de la presente resolución. **DÉCIMO SEGUNDO.** Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México".

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó la propuesta modificada del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado "Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México", en su parte segunda. El proyecto propone reconocer la validez del artículo 29, apartado B, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual reza que "Ningún partido



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos principios”; en razón de que el criterio de cumplir con los lineamientos del Congreso de la Unión, contenidos en los artículos 52 y 54 constitucionales —según la tesis de jurisprudencia P./J. 69/98 (9a.), de rubro: “MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”— ha sido superado no sólo por la reforma constitucional de dos mil dieciséis, sino por criterios posteriores de este Tribunal Pleno, máxime por la discusión de la sesión anterior, en cuanto a la libertad configurativa de las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, para diseñar sus sistemas electorales.

Abundó que el límite de sobrerrepresentación, a partir de la reforma de la Ciudad de México, se encuentra en el artículo 122 constitucional, consistente en que el porcentaje de votos que hubiesen obtenido los partidos políticos no puede ser mayor a ocho por ciento, lo cual se respeta con el tope de cuarenta diputados establecido en el precepto impugnado, lo que garantiza tanto la posibilidad de obtener una mayoría absoluta en el Congreso local sin exceder el límite de sobrerrepresentación pues, aún en la hipótesis de que un partido obtuviera esas cuarenta curules, representaría el 60.6% de integrantes del Congreso.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con la propuesta modificada, especialmente con el párrafo once de la adenda presentada, en el sentido de que se persigue una representatividad al órgano por la forma en que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se combinarán los diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, por lo que el tope de cuarenta diputados es válido.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó que en la sesión anterior esgrimió las razones por las que estará por la validez de este precepto. Expresó salvedad en cuanto a que no necesariamente el límite de cuarenta diputados constituye una sobrerrepresentación porque, si un partido político los obtuviera —el 60.6% del Congreso local— no podría acceder a un número mayor de diputados. Para ello, reservó su derecho de formular un voto concurrente.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó a favor de la propuesta modificada y por la constitucionalidad del precepto.

La señora Ministra Luna Ramos se posicionó en favor de la propuesta modificada, y reservó su derecho de formular voto concurrente para apartarse de algunos criterios que se invocan, a saber, ya que la medida no es necesariamente razonable, sino que implica un sistema funcional que da gobernabilidad y que no excede los porcentajes de sobrerrepresentación ni de subrepresentación.

Sugirió matizar el párrafo seis, en sus incisos a), b) y c), del proyecto modificado, pues no se trata del ocho por ciento, sino de ocho puntos, como lo establece la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constitución Federal y la Constitución Política de la Ciudad de México.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

La señora Ministra Piña Hernández se pronunció en favor del proyecto modificado, apartándose de algunas consideraciones que hará valer en un voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado “Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México”, en su parte segunda, consistente en reconocer la validez del artículo 29, apartado B, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo apartándose de algunas consideraciones alusivas a la sobrerrepresentación, Piña Hernández apartándose de consideraciones, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales con precisiones. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. Los señores Ministros Luna Ramos y Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó la propuesta modificada del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado “Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México”, en su parte tercera. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 1, en su segunda porción normativa “diecisiete”, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Recordó que en el proyecto original no se realizó su estudio porque se proponía la invalidez, por vía de consecuencia, de la porción normativa “En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional, lista ‘A’. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación proporcional, lista ‘B’, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple la ley”.

Precisó que la accionante consideró que los partidos deben registrar una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional, y que los otros diecisiete espacios serán ocupados de conformidad con el procedimiento que contemple la ley, así que la suma resultan ser treinta y cuatro diputados, y si el límite máximo para la representación proporcional son treinta y tres, entonces se violaría el derecho a ser votado. Se estima que, por una parte, de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

acuerdo con la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México —legislación secundaria—, la lista B es para la primera minoría, que se va intercalando con las listas provisionales hasta llegar a una lista definitiva, por lo que no se suscitaría ese fenómeno de sumar treinta y cuatro diputaciones y, por tanto, resultaría válida la norma estudiada; sin embargo, debe prevalecer el principio de certeza electoral, por lo que se considera fundado el agravio en el sentido de que la norma no es clara en cuanto a qué sucedería con la suma de treinta y cuatro diputados.

El señor Ministro Pérez Dayán observó que el proyecto, para alcanzar su conclusión, acude al contenido de la ley secundaria; sin embargo, de los trabajos legislativos de la Constitución impugnada se advierte que la lista A se contempló que se integraría con una fórmula de representación proporcional pura de diecisiete candidatos y, que los restantes diecisiete se integrarán incluyendo a estos espacios a quienes no tuvieron el voto popular mayoritario, habiendo participado en elecciones de mayoría relativa, alcanzaron las votaciones más altas. Estimó que este es un modelo novedoso, tendente a privilegiar a aquellos candidatos que no alcanzaron el triunfo en los distritos en los cuales participaron, pero que su votación fue de las más altas —hasta en un número de dieciséis—, para ingresar al Congreso local mediante un sistema que no necesariamente obedece al de listas, sino de espacios; por tanto, no debieran denominarse “candidatos” para integrar este segundo grupo o bloque de representación proporcional, pues solo lo fueron



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

respecto de los distritos que no ganaron por el principio de mayoría relativa.

Sugirió, entonces, explicar que, para la primera parte, es conveniente mantener la expresión “candidatas y candidatos”, y que para la segunda parte se entiendan como “espacios”, lo que resultaría acorde con el trabajo legislativo del precepto.

En el caso concreto, indicó que, si el límite de diputados es de treinta y tres, con la propuesta se entendería que son diecisiete candidatos a ocupar la primera lista por el principio de representación proporcional, más los dieciséis que fueron de mayoría relativa, pero que no alcanzaron el triunfo, aunque tuvieron votaciones significativas, siempre que se sujeten a la paridad de género, en la inteligencia de que ya no tienen, para este último efecto, la característica de candidatos, sino de personas que ocuparán espacios. Apuntó que el error alegado de la suma de treinta y cuatro escaños se salva con el contenido del trabajo legislativo respectivo y su evolución.

Abundó que el artículo 34, apartado B, numeral 1, inciso c), de la Iniciativa con Proyecto de la Constitución de la Ciudad de México establecía que “Los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas o candidatos por el principio de representación proporcional, lista ‘A’. Los otros dieciséis espacios de la lista de representación proporcional, lista ‘B’, serán ocupados de conformidad con el procedimiento que contemple la ley”, con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

lo que la suma resultaba treinta y tres escaños. Aclaró que el dictamen de discusión también daba cuenta de diecisiete y dieciséis lugares. En ese sentido, consideró que el error de establecer diecisiete y diecisiete escaños probablemente se suscitó durante la Conferencia de Armonización de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se encargó de la armonización del texto de la Constitución impugnada, sin mediar razón alguna y que, finalmente, derivó en la actual redacción de su artículo 29.

Con esta explicación, anunció que estará de acuerdo con el sentido del proyecto.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena no compartió el proyecto, al no existir norma constitucional alguna que se esté violando o que prohíba estas listas, por lo que, en todo caso, es expresión de la libre configuración de las entidades federativas.

Apuntó que, si bien no resulta ser una regla idónea o fácil de administrar, los futuros casos hipotéticos no son motivo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, pues pudiera ser que el legislador haya previsto un riesgo, por ejemplo, que uno de esos candidatos renuncie por motivos personales o una enfermedad, además de que, si finalmente no resulta conveniente ese sistema, podrá cambiarlo la propia legislatura.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que el precepto distorsiona la certeza, por lo que debería declararse la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

invalidez de la segunda porción normativa “diecisiete”, y no todo el artículo, como proponía el proyecto original, así como eliminar la orden de legislar nuevamente, para así lograr un sistema más certero y funcional, además de no generar una carga adicional a la Asamblea Constituyente.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció por la validez total del precepto, dado que el supuesto fáctico alegado es de imposible realización, esto es, que un partido gane el cien por ciento de los votos, que es la única manera en que se superaría el límite de las treinta y tres diputaciones por presentación proporcional para llegar al diputado número treinta y cuatro.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó su voto por la validez total del precepto, compartiendo los argumentos del señor Ministro Franco González Salas. Sugirió, en la parte del proyecto que reconoce la validez del precepto, que no se argumente con la ley secundaria correspondiente, sino solamente a la luz de la Constitución General, so pena de tomarse la referencia de una norma inferior para validar una de grado superior.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró que el precepto no es inconstitucional, al no violar ninguna regla expresa o principios de la Constitución Federal.

Explicó que las dos listas, “A” —del principio de representación proporcional propiamente— y “B” —integrada por las personas que obtuvieron la mayor votación, después



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del ganador, en los distritos respectivos—, son provisionales y su finalidad es integrar una lista definitiva, por lo que es necesaria la cita en el proyecto de la ley secundaria, en la medida de que indica cómo funciona ese procedimiento de integración de la lista definitiva.

Observó que la razón de la propuesta para declarar inválida una parte del precepto es que incurre en una imprecisión que afecta el principio de certeza y genera, además, un impacto en el derecho a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II, constitucional; así, se enfoca en que, como se prevén dos listas con diecisiete espacios cada una, suman un total de treinta y cuatro, lo que rebasa el límite de treinta y tres diputados que pueden ser electos por el principio de representación proporcional.

Valoró que del anterior argumento no puede sostenerse la invalidez propuesta porque, de ninguna manera, puede pensarse que serán tomados en cuenta todos los integrantes de ambas listas, sea que se previeran de dieciséis espacios, diecisiete o más, dado que el número de espacios a ocupar para la lista B dependerá de la votación que obtenga el partido político en cuestión en los distritos uninominales, además de que el impacto en el derecho a ser votado no sólo dependerá de encontrarse en el espacio número diecisiete de la lista B, sino que, por ejemplo, puede darse desde números anteriores o, incluso, desde la lista A, es decir, algunas personas no serán tomadas en cuenta porque la votación que obtiene el partido político no alcanza para



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

garantizarles un lugar bajo el principio de representación proporcional.

Concluyó que resulta irrelevante, desde el punto de vista constitucional, que se establezca que las dos listas se compondrán de diecisiete espacios porque, al final de cuentas, el número de treinta y tres curules no puede ser rebasado bajo el principio de representación proporcional y las reglas de asignación de diputados bajo este principio.

La señora Ministra Piña Hernández se expresó en favor del proyecto, apartándose de algunas consideraciones. Aclaró que los conceptos de invalidez no refirieron a que se tratara de candidatos, sino de espacios ocupados y, por tanto, resultaría infundado el argumento con su simple lectura, siendo que no se esgrimió ningún razonamiento de que se supere el número de treinta y tres diputaciones.

No obstante, coincidió con el proyecto al considerar que, en estricto sentido, se viola del derecho al sufragio pasivo establecido en el artículo 35, fracción II, constitucional, en tanto que la inclusión de un ciudadano a estas listas implica la posibilidad de ser elegido, además de que pudiera vulnerarse el principio de autenticidad del sufragio, previsto en su diverso artículo 41.

Por estas razones, concordó con la propuesta de invalidez, que no afecta la mecánica de integración de las listas ni el proceso electoral.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que su objeción de hacer referencia a la legislación secundaria es técnica: una norma de grado inferior no puede servir para sostener la validez de una de grado superior, además de que *contrario sensu* si la ley contuviera algún vicio, confirmaría su inconstitucionalidad con el precepto del cual depende su validez.

El señor Ministro Pérez Dayán leyó el párrafo uno de la propuesta modificada “Finalmente, el Partido Político Morena impugna el numeral 1 del apartado B del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, por estimar que, mientras la lista ‘A’ se refiere a ‘candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional’, la lista ‘B’ alude a quienes ocuparán tales cargos, lo que, considera, puede subsanarse si se interpreta que ambas listas están referidas a ‘candidatos’. Adicionalmente, señala que la suma, en todo caso, de los candidatos de la lista ‘A y la lista ‘B’, no debería ser de 34, sino de 33”, por lo que expresó duda acerca de la observación de la señora Ministra Piña Hernández, referente a que no se argumentó en relación con el límite de los treinta y tres diputados.

La señora Ministra Piña Hernández precisó que no se refería al resumen del concepto de invalidez contenido en el proyecto, sino a cómo se redactó en la demanda —en sus páginas cuarenta y cuatro y siguiente—, por lo que se reiteró por el sentido del proyecto y en contra de sus consideraciones.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Medina Mora I. estimó que, si bien se trata de una equivocación en la redacción del precepto en estudio —como aludió el señor Ministro Pérez Dayán—, concordó con el señor Ministro Pardo Rebolledo en que se trata de listas provisionales, por lo que no se genera ninguna afectación al derecho de voto pasivo, además de que tanto los operadores jurídicos como los actores políticos entienden bien las reglas, así que no puede alegarse ninguna expectativa frustrada en la norma. Por tanto, no coincidió con la propuesta de invalidez, en tanto que el dispositivo cuestionado no es contrario a ningún precepto constitucional.

Valoró como ilustrativa la referencia a la legislación secundaria, aunado a que el proyecto no sostiene la validez del precepto impugnado con ella.

La señora Ministra Luna Ramos retomó que el problema que resaltaron los accionantes es que ambas listas, al prever cada una diecisiete espacios a integrar, sumarían treinta y cuatro candidatos para repartir un límite de treinta y tres curules.

Al respecto, estimó que, si bien el procedimiento de asignación depende del porcentaje de la votación, debe evitarse cualquier confusión alusiva a que será un total de treinta y cuatro espacios, cuando sólo se pueden asignar treinta y tres diputaciones, por lo que respaldó la propuesta del proyecto, por certeza jurídica. Apuntó que no debería contemplarse el hecho de que un partido político obtenga el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cien por ciento de los votos, puesto que es una expectativa no factible.

El señor Ministro Pérez Dayán advirtió que el proyecto indica que “los diecisiete ‘espacios’ de la lista ‘B’, que serán ocupados en su momento (una vez conocidos los resultados de la votación)”, por lo que estimó que no existe una lista previa; en ese sentido, reiteró que la propuesta es correcta pues, al eliminar la previsión de que la segunda lista tendrá diecisiete espacios, los interesados sabrán que, después de los primeros diecisiete lugares asignados, sólo restarán dieciséis.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció en contra del proyecto y por la validez total de la norma, con los argumentos expuestos por los señores Ministros Franco González Salas, Medina Mora I. y Pardo Rebolledo.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek sostuvo el proyecto en sus términos porque la propuesta contribuye a la seguridad jurídica y respeta la libertad configurativa.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado “Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México”, en su parte tercera, consistente en declarar la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 1, en su segunda porción normativa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“diecisiete”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, respecto de la cual se expresó una mayoría de seis votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Piña Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron a favor. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente.

Por tanto, y dado el ofrecimiento del señor Ministro ponente Laynez Potisek de elaborar el engrose conforme al criterio mayoritario, la votación definitiva deberá indicar:

Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales, se reconoció la validez del artículo 29, apartado B, numeral 1, en su segunda porción normativa “diecisiete”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, respecto del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado “Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México”, en su parte tercera. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Piña Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron a favor del proyecto, por la invalidez propuesta. El señor Ministro



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto particular.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado “Régimen de elección de las Alcaldías”. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 53, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en la porción normativa “donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial”, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Lo anterior, en razón de que, en el artículo 122 constitucional, tras la reforma de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se previeron las demarcaciones territoriales, como la base de la división territorial de la Ciudad de México y la de su organización política y administrativa, cuyo órgano de gobierno son las alcaldías, cuya integración se vota por planilla, no de forma individual a cada integrante.

Por tanto, se considera que es fundado el agravio, puesto que la porción normativa obliga a dividir la demarcación territorial en diversas circunscripciones, lo que se traduce, primero, en una limitación a los partidos políticos y también el derecho a ser votado y, segundo, provoca que un candidato, que reúne el requisito por vivir en una colonia, una vez que sea electo como parte de la planilla, bastará que cambie de domicilio para dejar de cumplir este requisito, lo que no resulta razonable o funcional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz apuntó que se omitió abordar el estudio del tema 3, parte cuarta, referente al artículo 29, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Valoró que la omisión de señalar el carácter directo del voto no afecta la validez del precepto. Reservó su criterio para cuando se discuta el tema de las alcaldías.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado “Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México”, en su parte cuarta, consistente en reconocer la validez del artículo 29, apartado A, numeral 2, en la porción normativa “Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, al tenor de la interpretación conforme propuesta; en razón de que la omisión de contemplar que el voto es directo no afecta a ningún principio constitucional, puesto que de una interpretación sistemática de los demás preceptos de la Constitución impugnada se desprende que el sufragio es directo.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó en favor del proyecto. Sugirió corregir la mención del proyecto a una interpretación conforme, pues realmente es sistemática.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Laynez Potisek modificó el proyecto para precisar que se trata de una interpretación sistemática, no conforme.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado “Principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Ciudad de México”, en su parte cuarta, consistente en reconocer la validez del artículo 29, apartado A, numeral 2, en la porción normativa “Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, al tenor de la interpretación sistemática propuesta, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reabrió la discusión en torno al apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado “Régimen de elección de las Alcaldías”.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que no son inconstitucionales las circunscripciones dentro de las demarcaciones territoriales, dado que, si bien el artículo 122 constitucional no alude a esta división, el diverso 35 indica



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que son derechos del ciudadano poder ser votado “teniendo las calidades que establezca la ley”, lo cual incluye estas formas artificiales de delimitación geográfica, como sucede, por ejemplo, con los distritos uninominales. Aclaró que este asunto no implica la discusión del fenómeno conocido en la ciencia política como *Gerrymandering* —manipulación de las circunscripciones para producir un determinado resultado electoral—. Finalmente, estimó que es un diseño que la Asamblea Constituyente determinó en uso de su libertad de configuración, aunado a que el artículo 115 constitucional no lo limita ni introduce ninguna modalidad en la forma de concebir los espacios de gobierno en la Ciudad de México. Por eso, estará en contra de propuesta.

La señora Ministra Piña Hernández tampoco compartió el proyecto porque la norma impugnada no distorsiona el principio de representación proporcional, sino que vincula a un concejal con una circunscripción de la demarcación territorial, pero no en relación con la votación para elegirlo, sino sólo para la rendición de cuentas, una vez elegido mediante el sistema de planillas. Por tanto, el precepto impugnado es compatible con el sistema de planillas, en el entendido de que la que obtenga mayoría de votos ganará los cargos de mayoría relativa, y el resto serán integrados por representación proporcional, siendo que, aunque los miembros de la alcaldía representan a todos los habitantes de la demarcación, vincular a un concejal con una circunscripción específica facilita la participación de la ciudadanía y la comunicación con las autoridades, además



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la rendición de cuentas y su evaluación, incluso, para efectos de su eventual reelección.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena suscribió la participación de la señora Ministra Piña Hernández, por lo que estará en contra del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas se sumó a estar en contra del proyecto, por razones similares a las expresadas en ese sentido.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra del proyecto. Leyó el precepto impugnado: “Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial”, es decir, los concejales no necesariamente deben tener el requisito de elegibilidad consistente en pertenecer a esa demarcación.

El señor Ministro Pardo Rebolledo sostuvo la validez del precepto, al estimar adecuado que pretenda que, en este tipo de elecciones, se busquen personas que representen a distintas zonas de una misma demarcación, con lo que se enriquece al órgano de representación popular.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se posicionó en contra del proyecto y por la validez del precepto, suscribiendo en gran medida las razones expresadas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Medina Mora I. compartió las consideraciones y la conclusión del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció en contra de la propuesta, ya que la norma en cuestión favorece una amplia representación de la ciudadanía en el ámbito territorial, además de que la palabra “circunscripción” no está encaminada a establecer una división de las demarcaciones territoriales para efectos de elección, ni modifica la forma de elección, puesto que ésta seguirá siendo mediante planillas. Coincidió también con los otros argumentos que se han esgrimido por la validez de esta disposición.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek sostuvo el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado “Régimen de elección de las Alcaldías”, consistente en declarar la invalidez del artículo 53, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en la porción normativa “donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, respecto de la cual se expresó una mayoría de nueve votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

señores Ministros Medina Mora I. y Laynez Potisek votaron a favor.

Por tanto, y dado el ofrecimiento del señor Ministro ponente Laynez Potisek de elaborar el engrose conforme al criterio mayoritario, la votación definitiva deberá indicar:

Por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, se reconoció la validez del artículo 53, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en la porción normativa “donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, respecto del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado “Régimen de elección de las Alcaldías”. Los señores Ministros Medina Mora I. y Laynez Potisek votaron a favor del proyecto, por la invalidez propuesta.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 5, denominado “Supuestos de Nulidad de elecciones”. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 27, apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Se retoma el criterio de esta Suprema Corte, referente a que los congresos locales pueden adicionar o prever



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

distintas causales de nulidad; no obstante, existen tres previstas en el artículo 41, base VI, párrafo tercero, de la Constitución Federal y que son aplicables para las elecciones federales y locales: “a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”, y que “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento” —párrafo cuarto—.

En ese tenor, indicó que el problema devine en que el artículo impugnado introdujo causales adicionales de nulidad, lo cual no es *per se* inconstitucional; sin embargo, contempló que “Sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución, incluyendo la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

violencia política”, es decir, introdujo algunas de las causales de índole federal, como el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra de tiempos en radio y televisión y el rebase del tope de gastos de campaña.

Por tanto, resulta fundado que hay una violación al principio de seguridad jurídica porque, por ejemplo, cuando haya un rebase en el tope de gastos de campaña, no hay certeza de si se aplicará el precepto impugnado o el supuesto de la Constitución Federal, pues éste —además— exige que se exceda ese tope en un cinco por ciento del monto total autorizado, es decir, las presunciones y los límites de la Constitución Federal no se repiten en la Constitución local, lo cual resulta grave tomando en cuenta que estas causales son las más litigiosas, una vez concluidas las elecciones.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el proyecto porque se viola el principio de certeza electoral, como lo estudia el proyecto en su cuadro comparativo entre los artículos 41 de la Constitución Federal y 27 de la Constitución impugnada, en el que se demuestra que muchas circunstancias del primero no fueron trasladadas al segundo.

Apuntó que se podría suponer una interpretación sistémica, en el sentido de que todo lo no dicho en el artículo 27 se retome del artículo 41, pero en materia electoral es importante no dejar ninguna duda acerca de las reglas que se aplicarán, por lo que, habiendo un mandato particular en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dicho artículo 41 con una enorme materialidad para trasladarse a la situación de la Ciudad de México, estará de acuerdo con la invalidez propuesta.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con la propuesta de invalidez, pero únicamente respecto de la porción normativa: “el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña”, puesto que son las únicas ya contempladas en el artículo 41 constitucional; siendo que, para las demás, no exige calificativos, determinantes o condiciones algunas.

El señor Ministro Pérez Dayán coincidió con el proyecto, en tanto que el precepto impugnado viola los principios de taxatividad y razonabilidad, ya que, independientemente de que la ley secundaria pueda desarrollar cada una de estas figuras, la directriz estará marcada por esta base constitucional local que no se puede modificar por dicha legislación, y si bien las hipótesis previstas implican vicios indeseables en cualquier elección, la labor del legislador será muy compleja, lo que genera inseguridad.

Participó de la idea de que el artículo 41 constitucional es bastante preciso, además de que puede observarse a nivel local, con el fin de no generar inseguridad ni incertidumbre, es decir, para que los actores políticos en la contienda sepan perfectamente bien los límites de su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

actuación y cuáles pueden ser las consecuencias que les acarrea infringirlos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se apartó del proyecto porque la Asamblea Constituyente emitió la norma impugnada haciendo uso de su libertad de configuración, además de que acató lo establecido por este Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas y 126/2015 y su acumulada, en el sentido de que el artículo 116, fracción IV, inciso m), constitucional obliga a las entidades federativas a establecer, en sus Constituciones y en sus leyes, las causales de nulidad de las elecciones bajo un régimen de libertad configurativa, atendiendo a las bases del artículo 41, base VI, constitucional, que indica: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Agregó que el artículo 78 bis, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que: “Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Así, dado que los preceptos leídos son de aplicación directa a todas las elecciones, se debe interpretar el artículo impugnado sistémicamente con los preceptos constitucionales y de la ley general aducidos, con lo que se salva la falta de certeza, en la inteligencia de que el Constituyente local consideró que los otros presupuestos no previstos en las otras normas referidas son importantes para generar mayor equidad en las contiendas electorales y respetar el principio de legalidad y el voto ciudadano.

El señor Ministro Medina Mora I. se expresó en favor del proyecto, por distintas razones, ya que, como votó en la acción de inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015, tras la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, es en la base VI del artículo 41 constitucional, en la que se previó lo necesario para generar certeza respecto de las causales para declarar la nulidad de elecciones federales y locales; no obstante existe una reserva de ley, en virtud de la cual, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se adicionó un capítulo IV “De la nulidad de las elecciones federales y locales”, al título sexto “De las nulidades”, a efecto de reglamentar esa base electoral, por lo que esa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

reglamentación no está disponible para las entidades federativas.

La señora Ministra Piña Hernández anunció voto favorable al proyecto, apartándose de algunas consideraciones, porque al resolver la acción de inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015, se estableció el criterio de que las entidades federativas tienen libertad de configuración legislativa, siempre que se ajusten al artículo 41 constitucional.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se posicionó en favor de la propuesta, ya que existe una libertad de configuración, como lo ha sostenido esta Suprema Corte, siempre que se atiendan a las condiciones específicas de los artículos 41, 116 y 122 constitucionales, siendo el caso que la Constitución Política de la Ciudad de México carece de esa precisión normativa que determine, específicamente, si se satisfacen las condiciones de graves, dolosas y determinantes, o se acrediten de manera objetiva y material.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó de acuerdo con la propuesta, con excepción de la porción normativa “que se acredite la existencia de violencia política de género” porque, al ser una cuestión relacionada con la perspectiva de género que establecen los tratados internacionales, debe dársele un trato diferenciado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 5, denominado “Supuestos de Nulidad de elecciones”, consistente en declarar la invalidez del artículo 27, apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó por la invalidez únicamente de la porción normativa “el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña”. La señora Ministra Luna Ramos votó con la propuesta del proyecto, excepto por la porción normativa “que se acredite la existencia de violencia política de género”. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Franco González Salas y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 6, denominado “Reelección consecutiva de Diputados al Congreso de la Ciudad de México”. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 3, en la porción normativa “para un sólo período consecutivo”, de la Constitución Política de la Ciudad de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

México; en razón de que el artículo 122, apartado A, fracción II, párrafo tercero, constitucional, contempla que “En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos”.

Relató que la reforma constitucional a dicho artículo 122 respondió a que: 1) la reelección permite crear un vínculo más estrecho entre los representantes y sus electores, y que el legislador sabe que, al concluir su periodo, requerirá nuevamente su apoyo, 2) la reelección profesionaliza al Congreso, es decir, hay una verdadera carrera parlamentaria, en lugar de reinventar las labores del legislativo, y 3) proporciona un mayor poder al ciudadano porque el voto se transforma en un medio para premiar o sancionar a los representantes populares. Por otro lado, dio cuenta de que, en los debates parlamentarios, se puso de manifiesto el riesgo o inconveniente de que una reelección no tenga límites, conforme a experiencias advertidas en otras latitudes.

El proyecto propone determinar que, si se toman en consideración los objetivos señalados y los inconvenientes analizados en el debate parlamentario de la reforma, la frase “hasta por cuatro periodos consecutivos” es un límite máximo para evitar la reelección ilimitada o vitalicia, mas no significa que las legislaturas locales, una vez que se suprimió la prohibición histórica de no reelección, puedan limitar la posibilidad de reelección de cuatro hacia abajo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mucho menos una sola reelección, por lo que, en el caso concreto, no se cumplen los objetivos del Constituyente Federal.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el proyecto porque, del artículo 122, apartado A, fracción II, párrafo tercero, constitucional, el término “hasta” debe entenderse como un límite máximo de posibilidades de reelección, dentro de las cuales deben permitirse las elecciones consecutivas; así, si el artículo impugnado prevé una sola elección consecutiva, distorsiona este principio constitucional, además de que no le era disponible al Constituyente de la Ciudad de México.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena indicó que la palabra “hasta” de los artículos 116 y 122 constitucionales implica cierta libertad configurativa a las entidades federativas para elegir cuántas veces se permitirá la elección consecutiva dentro del parámetro de esas cuatro veces, como ha votado en precedentes.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó que, como ha votado en los precedentes, la reelección de diputados locales debe ser necesariamente por cuatro periodos consecutivos, por lo que estará con el sentido del proyecto, por razones distintas que explicitará en un voto concurrente.

El señor Ministro Franco González Salas recapituló que, en los precedentes en los que ha participado, ha votado



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en el sentido de que la posibilidad de la reelección hasta por cuatro ocasiones dependerá de la voluntad de los electores, como principio fundamental de la democracia, por lo que estará en favor del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán valoró que la expresión “hasta por cuatro periodos consecutivos” es un parámetro máximo, dentro del cual las entidades federativas tienen libertad de configuración para que en sus Constituciones y legislaciones secundarias puedan determinar el número que corresponda a sus necesidades, intenciones y fines.

En este sentido, en el caso del Constituyente de la Ciudad de México, concluyó que si consideró que “hasta” equivale a una sola ocasión más, lo hizo en uso de su libre ejercicio, por lo que no se puede vulnerar la capacidad organizativa, funcional o de representación popular, obligando a que las legislaturas consideren un número obligatorio y cerrado de elecciones consecutivas.

Por tanto, concluyó que la disposición combatida es válida, bajo la interpretación de que la Constitución Federal que, al establecer la figura, puso un límite final, mas no construyó a que éste lo fuera siempre.

La señora Ministra Piña Hernández recordó que en la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas, en donde se examinó el mismo tema, votó en el sentido de que, a partir del análisis del proceso legislativo del Constituyente Federal, las entidades federativas cuentan con libertad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

configurativa porque, de la redacción de los artículos 116, fracción II, párrafo segundo, y 122, apartado A, fracción II, párrafo tercero, constitucionales, que además entre ellos coinciden, se advierte que el número de períodos serán expresamente hasta por cuatro, por lo que se posicionó en contra del proyecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se expresó en favor del proyecto porque, de acuerdo con los precedentes, la expresión “hasta por cuatro periodos consecutivos”, debe entenderse en el sentido de que las normas locales deben reiterar la disposición constitucional, y lo único que determinará si una persona llega o no a las cuatro ocasiones será el voto en su favor.

La señora Ministra Luna Ramos participó del proyecto, elaborado conforme al criterio mayoritario. Reconoció que, en un principio, interpretó que “hasta” daba posibilidades al legislador local de determinar el número de posibilidades de reelección, aun cuando estas fueran inferiores a cuatro; pero posteriormente se adhirió a dicho criterio mayoritario.

El señor Ministro Medina Mora I. compartió el proyecto, pero con reservas, en cuanto a que debe basarse exclusivamente en el artículo 122 constitucional, no en su diverso 116 pues, si bien son similares, este último contiene una coma adicional que pudiera variar el aspecto de la libertad configurativa.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales retomó que, desde que se estudió la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, consideró que las cuatro ocasiones consecutivas contenidas en el artículo 116 constitucional debían entenderse como una determinación final, no como un techo que permitiera establecer menos ocasiones. En el caso del artículo 122 constitucional, indicó que no tiene la coma que contempla su diverso 116, por lo que se evidencia que la Constitución impugnada debe ajustarse a la Constitución Federal, esto es, estableciendo que deben tener la posibilidad de ser electos hasta en cuatro ocasiones. En ese sentido, coincidió con la propuesta.

El señor Ministro Pérez Dayán se externó convencido por las intervenciones de los señores Ministros Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales, en cuanto a la redacción sin coma del artículo constitucional que estipuló el tema para la Ciudad de México, por lo que se sumó a la propuesta de invalidez.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek sostuvo el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 6, denominado “Reelección consecutiva de Diputados al Congreso de la Ciudad de México”, consistente en declarar la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 3, en la porción normativa “para un sólo período consecutivo”, de la Constitución



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Política de la Ciudad de México, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Piña Hernández votaron en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el apartado VIII, relativo a los efectos.

Se indica que las declaraciones de invalidez deben notificarse al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas; sin embargo, en el caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, conforme a la reforma constitucional del artículo 122, cesó sus funciones una vez que entró en vigor la Constitución combatida, por lo que hay imposibilidad jurídica y material de notificarla.

Recordó que el proyecto original proponía notificar de los puntos resolutivos a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno; pero no pueden realizar modificaciones a la Constitución local.

Modificó el proyecto para que la sentencia se publique en el Diario Oficial de la Federación, sin mediar ningún mandato de notificación ni de legislación específicos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán acotó que esta Suprema Corte no se había enfrentado a la particularidad de analizar el producto de un Constituyente originario cuya existencia, por mandato de la propia Constitución Federal, cesó al entrar la Constitución impugnada en vigor.

Recapituló que las declaratorias de invalidez de este fallo no suponen la obligación de legislar en consecuencia; que desde la admisión de la demanda, la reclamación subsiguiente y su decisión, se resolvió que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México era la autoridad demandada y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era el tercero interesado; y que la publicación de las determinaciones de una acción de inconstitucionalidad obedece a que los efectos deben conocerlos no sólo las partes contendientes, sino la ciudadanía.

De tal suerte, sugirió que los efectos de esta sentencia surtan a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como la forma de comunicación institucional más efectiva y que dará certeza de su conocimiento, especialmente, de que las disposiciones declaradas inválidas ya no tendrán vigencia, y no tomar en cuenta la notificación de las partes contendientes ni de los terceros interesados para esos efectos.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena opinó que no se declaró la invalidez de toda la Constitución impugnada, sino de algunos preceptos, por lo que no se le debería dar un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

trato distinto a la notificación habitual de esta Suprema Corte.

El señor Ministro Medina Mora I. estimó conveniente tomar en cuenta la trascendencia de lo invalidado en esta sentencia a lo previsto en la legislación electoral local ordinaria impugnada en las acciones que le fueron turnadas; en la inteligencia de que, en todo caso, formularía un voto concurrente respecto de alguna posible declaración de invalidez en vía de consecuencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recapituló que en el recurso de reclamación, interpuesto contra esta acción de inconstitucionalidad, se determinó a cuáles autoridades se tendrían como partes, por lo que lo congruente sería notificarlas a todas y determinar que se surtan efectos a partir de esa notificación.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek estimó adecuada la sugerencia del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, para que se les notifique en el domicilio especificado en ese recurso.

El señor Ministro Cossío Díaz consultó si se notificará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, puesto que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cesó en sus funciones.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reiteró que se notificarían a las autoridades que se determinaron en la resolución de la reclamación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, debe existir certeza de la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos esta acción de inconstitucionalidad, por lo que no sólo debe contemplarse la notificación a las autoridades participantes, sino también a toda la ciudadanía para su conocimiento, por lo que debe observarse su diverso numeral 44, párrafo segundo: “Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado” y, por tanto, sugirió determinar que dichos efectos se surtan a partir de su publicación en este medio.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales detalló que la Asamblea Constituyente fue reconocida como parte interesada; sin embargo, la Asamblea Legislativa podría tener directamente la calidad de autoridad para esos efectos y, con la finalidad de tener una sola fecha de referencia para generar certeza, es conveniente determinar que los efectos de esta acción de inconstitucionalidad surtan a partir de la notificación a esta última autoridad, sin perjuicio de que se comunique a todas las partes.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con el señor Ministro Presidente Aguilar Morales porque se le reconoció el carácter de autoridad demandada a la Asamblea Constituyente, por lo que habrá que notificarle.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Laynez Potisek modificó el proyecto para notificar esta sentencia al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a quien se le reconoció como autoridad, sin perjuicio de que se notifique a las demás partes. Preciso que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede actuar como Constituyente.

El señor Ministro Pérez Dayán aclaró que su participación no implicaba dejar de notificar a las partes —en el caso, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno—, dado que ello está claro en el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de la materia: “Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen”; sin embargo, los efectos deben surtir conforme a lo determinado en su diverso numeral 45, por lo que a ello responde su sugerencia de publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial local.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea coincidió con notificar a todas las partes de esta acción de inconstitucionalidad, así como determinar que surta sus efectos a partir de la notificación a la Asamblea Constituyente, a quien se le reconoció como autoridad participante en la resolución del recurso de reclamación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que los efectos deberían surtir a partir de una notificación, y que el conocimiento público de la sentencia sea mediante su divulgación vía el Diario Oficial de la Federación.

Externó preocupación en cuanto a cuál órgano reparará las declaraciones de invalidez decretadas porque, si bien en la reclamación se reconoció como autoridad a la Asamblea Constituyente, terminó sus funciones cuando emitió la Constitución impugnada, por lo que no podrá hacerse cargo de dichas declaraciones de invalidez; por otra parte, la Asamblea tampoco tiene facultades para ajustar la referida Constitución, en virtud de que su artículo primero transitorio prevé su entrada en vigor el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y, por consiguiente, su artículo 69, que contempla sus funciones de Constituyente Permanente local.

En tal sentido, reflexionó que deberá precisarse a cuál órgano se le realizará la notificación correspondiente para que surtan efectos las declaraciones de invalidez.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales apuntó que debe observarse el artículo décimo primero de la Constitución Política de la Ciudad de México: "Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como para expedir las normas necesarias



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución. Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018”.

Por lo anterior, reiteró que debería notificarse a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tener esa fecha para que surtan certeza los efectos de esta acción de inconstitucionalidad, sin dejar de notificar a las demás partes, incluyendo al representante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en virtud de la resolución al recurso de reclamación.

El señor Ministro Pérez Dayán observó que el proyecto propone obligar a que se legisle en consecuencia de las declaraciones de invalidez, con lo que se manifestó disconforme, en tanto que, por ejemplo, una razón de invalidez fue que el sistema de causales de nulidad de una elección no requería reglamentación alguna por parte del Constituyente local o que no se podían prever menos de cuatro elecciones consecutivas.

Por otra parte, concordó en que se notifique la sentencia a todas las partes y que la fecha en que surta sus efectos sea la que este Tribunal Pleno decida.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que no hay propuesta de obligación para legislar.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Laynez Potisek corroboró que se eliminó la propuesta de mandato legislativo específico, además de que los únicos temas por los que se declaró la invalidez son subsanables una vez que entre en funciones el Constituyente Permanente de la Ciudad de México.

Modificó el proyecto para que la sentencia surta efectos a partir de la notificación al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, acreditado por la Segunda Sala para llevar la defensa de su Constitución, independientemente de que se notifique a las demás partes de esta acción de inconstitucionalidad.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales concordó en no pronunciarse sobre lo que puede hacer o no la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Apuntó que a todas las partes se les notificará la sentencia, pero lo importante es determinar la fecha en que surtirá sus efectos, pudiendo ser tanto a la Asamblea Legislativa como a la Asamblea Constituyente.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recalcó que no se declaró la nulidad de todo el decreto impugnado, por lo que no se da la situación *sui generis* de ordenar una nueva legislación. Coincidió con la propuesta del señor Ministro Presidente Aguilar Morales de que la sentencia surta efectos a partir de la notificación a la Asamblea.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Piña Hernández consideró que, dada la resolución de la Segunda Sala al recurso de reclamación, se les notifique a las dos Asambleas y que surta efectos ese día.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales aclaró que a la Asamblea Legislativa se le reconoció como parte interesada, y a la Asamblea Constituyente como demandada. Por ello, sugirió que la sentencia surta sus efectos a partir de su notificación al representante de la Asamblea Constituyente.

El señor Ministro Medina Mora I. recalcó que se le reconoció la personalidad a la Asamblea Constituyente únicamente para que defendiera su Constitución y, en este caso, la notificación solamente sería para efectos informativos, pues no podría actuar en consecuencia. Por tanto, estimó adecuado notificar a la Asamblea Legislativa o, en su caso, a las dos el mismo día.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales valoró que podría acordarse notificar tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el mismo día, a partir del cual surtirán sus efectos las declaraciones de invalidez, que no obligan a legislar nuevamente.

El señor Ministro Franco González Salas respaldó la propuesta del señor Ministro Presidente Aguilar Morales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estimó que, aunque en un principio estuvo en favor de la notificación a la Asamblea Constituyente, no impactaría la determinación de que sea al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y al Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estimó conveniente poner a consideración si también se notificará al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La señora Ministra Luna Ramos concordó con el señor Ministro Medina Mora I. en que el reconocimiento como autoridad a la Asamblea Constituyente fue para el solo efecto de defender su Constitución, en tanto que el artículo transitorio octavo, párrafo último, de la reforma constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México previó que “Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, las reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca”, que se relaciona con el artículo transitorio décimo primero de la Constitución de la Ciudad de México.

Con lo anterior, estimó que debería notificarse a la Asamblea Legislativa, dado que finalmente retomará sus funciones.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sugirió determinar que, independientemente de que se notifique a todas las partes, las declaraciones de invalidez surtan sus



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

efectos a partir de la notificación al representante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se realizará el mismo día.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek modificó el proyecto con la sugerencia realizada, aclarando que la notificación al representante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tiene como única finalidad que surta efectos la referida declaración de invalidez.

El señor Ministro Medina Mora I. estimó que no hay disposiciones que deban declararse inválidas en vía de consecuencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VIII, relativo a los efectos, consistente en determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin menoscabo de que este fallo se notifique a todas las partes en esta acción de inconstitucionalidad, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Exclusivamente en la materia de las impugnaciones sobre el proceso legislativo y las relacionadas con la materia electoral, son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 15/2017, promovida por el Partido Político MORENA, en relación con los artículos 25, apartados C, numeral 1, y F, numeral 2, 29, apartado B, numeral 3, y 69, numeral 5, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de la Ciudad de México. TERCERO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 16/2017, promovida por el Partido Nueva Alianza, respecto de los artículos 5, 15, 17, 19, 42, 54 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México. CUARTO. Se reconoce la validez del proceso legislativo que dio origen a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. QUINTO. Se reconoce la validez de los artículos 29, apartados A, numeral 2, y B, numerales 1 y 2, inciso a), y 53, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México. SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 27, apartado D, numeral 2, y 29, apartado B, numeral 3, en la porción normativa ‘para un sólo período



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

consecutivo', de la Constitución Política de la Ciudad de México. SÉPTIMO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutive de esta sentencia tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sin menoscabo de que este fallo se notifique a todas las partes en esta acción de inconstitucionalidad. OCTAVO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México".

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutive, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con nueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes veintiuno de agosto del año en curso, a las diez horas.



Sesión Pública Núm. 74

Jueves 17 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN